COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LA UNIVERSIDAD ARCIS, Y LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN RELACIÓN CON DICHA ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO Y EVENTUAL CIERRE DE ESA CASA DE ESTUDIOS (CEI 40)

SESIÓN 11ª, ORDINARIA, CORRESPONDIENTE A LA 365ª LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 13 DE JULIO DE 2017, DE 11:05 A 11:51 HORAS.

SUMARIO: La Comisión escuchó, sobre la materia de la investigación, a la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (FEUARCIS), señorita Sandra Beltrami Montero.

I. PRESIDENCIA

Presidió la sesión el diputado Diego Paulsen Kehr (Presidente titular). Actuó como Abogada Secretaria de la Comisión la señora María Soledad Fredes Ruiz y como Abogada Ayudante la señora Macarena Correa Vega.

II. ASISTENCIA

Asistieron los diputados integrantes de la Comisión, señoras Maria José Hoffmann Opazo y Camila Vallejo Dowling, y los señores Juan Antonio Coloma Álamos, Rojo Edwards Silva, Diego Paulsen Kehr, Roberto Poblete Zapata y Osvaldo Urrutia Soto.

En calidad de invitada asistió la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (FEUARCIS), señora Sandra Beltrami Montero, acompañada por el asesor señor Cristian Bravo Muñoz.

III. ACTAS

El acta de la sesión 9ª se declaró aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 10ª se puso a disposición de las señoras y señores diputados.

IV. CUENTA

Se presentaron los siguientes documentos:

1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la Sala acordó acceder a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de esta Comisión, por 30 días, hasta el 3 de agosto de 2017.

- A sus antecedentes.

2.- Correo electrónico de la abogada del Gabinete de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, a través del cual remite los siguientes archivos, solicitados por el Presidente de esta Comisión:

1) Propuesta de viabilidad financiera de Universidad ARCIS y análisis de su Estado de Deuda, presentado por don Claudio Lara, representante (convencional) de Corporación ARCIS, en sesiones de trabajo convocadas y desarrolladas por el Ministerio de Educación, en los meses de enero y marzo de 2017. (La propuesta de viabilidad financiera queda en la Secretaría de la Comisión por ser un archivo en formato excell).

2) Resolución Exenta N° 1746, mediante la cual se ordena dar inicio al procedimiento de revocación de reconocimiento oficial de Universidad ARCIS, por las razones que se indican.

3) Acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de Educación, mediante el cual se decide, de manera unánime, cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de Universidad ARCIS.

- Se pusieron a disposición de los miembros de la Comisión.

V. ACUERDOS

Se acordó, por unanimidad de los diputados presentes, reiterar los oficios remitidos por la Comisión y que no han tenido respuesta de parte de sus destinatarios.

VI. ORDEN DEL DÍA

La exposición de los invitados y las intervenciones de los diputados constan en detalle en el acta taquigráfica confeccionada por la Redacción de Sesiones de la Cámara de Diputados, que se adjunta a continuación.

El debate habido en esta sesión queda registrado en un archivo de audio digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 256 del Reglamento.

Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, se levantó a las 11:51 horas.

DIEGO PAULSEN KEHR
Presidente de la Comisión

MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ
Abogada Secretaria de la Comisión

**COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS PROCESOS DE
ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LA UNIVERSIDAD ARCIS, Y LA
ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN RELACIÓN CON
DICHA ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO Y EVENTUAL CIERRE DE
ESA CASA DE ESTUDIOS.**

Sesión 11^a, celebrada en jueves 13 de julio de 2017,
de 11.05 a 11.51 horas.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Preside el diputado señor Diego Paulsen.

Asisten las diputadas señoras María José Hoffmann y Camila Vallejo, y los diputados señores Juan Antonio Coloma, Rojo Edwards, Roberto Poblete y Osvaldo Urrutia.

Concurre como invitada la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, señorita Sandra Beltrami.

TEXTO DEL DEBATE

El señor **PAULSEN** (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

El Acta de la sesión 9^a se declara aprobada.

El Acta de la sesión 10^a queda a disposición de las señoras y señores diputados.

La señora Secretaria va a dar lectura a la Cuenta.

*-La señora **FREDES**, doña María Soledad (Secretaria) da lectura a la Cuenta.*

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra sobre temas varios.

Tiene la palabra el diputado Roberto Poblete.

El señor **POBLETE**.- Señor Presidente, respecto del procedimiento, me interesa saber qué tiempo nos vamos a dar de aquí en adelante, porque tengo la sensación de que

cerramos las audiencias, tras lo cual estaríamos en un espacio para elaborar y posteriormente emitir nuestro informe.

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Señor Poblete, teníamos pensado para el próximo jueves invitar al administrador de cierre. Lamentablemente, según información recabada de los medios de comunicación, no se cumplió el *quorum* necesario para su nombramiento. Ahora, según los plazos que entendemos que se pueden dar, lo más probable es que sea nombrado en semana distrital, es decir, en dos semanas más. Por lo tanto, esperamos que el jueves 3 de agosto lo podamos invitar y así cerrar con la información de los antecedentes que pueda tener a la mano.

Además, hemos sabido que esta semana están en proceso de elección interna los nuevos centros de alumnos de la universidad. Por lo tanto, si podemos tener contacto con ellos dentro de la próxima semana, los invitaremos para el próximo jueves. En caso contrario, podemos empezar a trabajar en conjunto en el informe, así como en la elaboración de propuestas. Trataremos de concordar un informe común dentro de los plazos, pero de no ser así se presentarán los informes correspondientes de cada uno de los integrantes de esta comisión.

A continuación, recabo el acuerdo para reenviar los oficios que no han sido contestados, el que ratificaremos una vez que tengamos el *quorum* correspondiente.

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo.

La señorita **VALLEJO** (doña Camila).- Señor Presidente, respecto de ese punto, quiero saber cuáles son los oficios que hemos enviado y cuáles no han sido respondidos. No solo quiero que se reiteren, sino que quiero saber qué es lo que no se ha respondido.

Respecto de los invitados, quiero saber quiénes son los que no han respondido. Lo consulto porque en este proceso he hecho propuestas, pero entiendo que no se han podido

establecer ciertos contactos. Entonces, quiero tener información para tener claridad respecto de quiénes han sido invitados y que por diferentes razones no han venido. De esta forma podremos saber qué es lo que tenemos pendiente y así poder elaborar el informe final.

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Solicito a la Secretaria que nos haga llegar todos los oficios que ya han sido contestados, así como los no contestados. Asimismo, solicito una lista de los invitados que han asistido y de aquellos que no han podido concurrir, con la justificación respectiva. Espero que nos pueda entregar esa información antes del jueves para así tomar la decisión de invitar a las personas que los miembros de la comisión consideren que es necesario que concurren y que no lo han podido hacer.

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo.

La señorita **VALLEJO** (doña Camila).- Señor Presidente, no recuerdo bien si solicitamos a la BCN un informe respecto de la ley de Quiebras. ¿Ese informe lo tenemos?

La señora **FREDES**, doña María Soledad (Secretaría).- Sí, señora diputada.

La señorita **VALLEJO** (doña Camila).- ¿Está disponible?

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Sí, se dio cuenta y vamos a enviarle el informe.

La señora **FREDES**, doña María Soledad (Secretaria).- También se está elaborando un estudio sobre propuestas de modificación a la ley del administrador provisional, la N° 20.800.

La señorita **VALLEJO** (doña Camila).- Y el primero lo tenemos.

La señora **FREDES**, doña María Soledad (Secretaria).- Sí.

La señorita **VALLEJO** (doña Camila).- El segundo estaría pendiente.

La señora **FREDES**, doña María Soledad (Secretaria).- Sí.

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Hoy tenemos como invitada

a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, la señorita Sandra Beltrami, quien viene acompañada del asesor señor Cristián Bravo Muñoz.

Tiene la palabra la señorita Sandra Beltrami.

La señorita **BELTRAMI** (doña Sandra).- Señor Presidente, como Federación de Estudiantes tenemos nuestra visión sobre lo que ha sido la administración provisional, sin perjuicio de que la Universidad Arcis fue intervenida de acuerdo con la ley N° 20.800, porque ya existía una crisis. Para esa crisis se nombra a un administrador, quien tenía como mandato elaborar un plan de salvataje de la universidad, plan que nunca se efectuó.

Debo decir que el mismo plan de administración provisional fue incumplido por el propio administrador, quien había señalado, desde un comienzo, que la sede Libertad se iba a vender en 8.500 millones de pesos y que la sede Huérfanos sería para la continuidad del proyecto académico, amén de que había realizado una planificación para la acreditación de la universidad. Pero nada de su plan de administración provisional cumplió el administrador.

Tampoco llevó a cabo el plan de reestructuración que la ley le señala. La ley lo mandata para realizar un plan de reestructuración. En cambio, prefirió hacer fue un plan de retiro voluntario, al cual se acogieron muy pocos trabajadores, lo que implicó que Arcis continuara con una gran planta funcionaria. Por ende, por la ley Bustos, las deudas previsionales y remuneracionales siguieron creciendo. En caso de haber existido un plan de reestructuración -esto lo señaló don Cristián Herrera, el liquidador de esta universidad, con una visión también más jurídica y propia de un liquidador-, repito, un plan de reestructuración, que no menoscabara los derechos de los trabajadores, los gastos del plantel hubiesen sido muy inferiores a los que llegaron a ser.

Hay varias cosas que quiero señalar, y que tienen relación también con el rol del administrador y del Mineduc.

Hay que pensar que el administrador, en el Plan de Administración Provisional y en los informes que elaboraba, presentaba diferentes cifras para la deuda de la Universidad, cifras que fueron en ascenso.

Entre fines de 2016 y principios de 2017 se instalaron dos mesas de diálogo: una mesa de diálogo interna en la Universidad y, otra posterior, que fue con el Ministerio de Educación. El objetivo de ambas mesas de diálogo era elaborar un plan de reestructuración. Nuestros docentes presentaron un plan de reestructuración financiera, académica y administrativa. Sin embargo, siempre fueron rechazados, porque el administrador provisional vivía cambiando las cifras, las mismas cifras que él había entregado en sus informes de administración provisional. Esa disparidad de cifras hacía que los planes de nuestros docentes, una y otra vez, no tuvieran vigencia, porque no se podían ajustar a esas cifras.

Ahora, me voy a referir a algunas intervenciones que se hicieron en esta Comisión.

La ministra de Educación, en la sesión del 9 de marzo - página 9 de la versión taquigráfica- señala que no se pudo hacer el cierre del año académico 2014, debido a las tomas, porque faltaban documentos y otros motivos.

Nosotros queremos referir que la toma duró once días, lo que hace muy débil esa razón, que por once días de toma no se pudo cerrar el año académico. La ministra también se refiere a algo que consideramos muy importante. Señala: con toda la investigación -se refiere a la investigación preliminar, por la cual se nombra al administrador provisional- se estimó que, si bien la Universidad había incurrido en ciertas infracciones estatutarias, estas no revestían la gravedad como para tener una sanción de

revocación del reconocimiento oficial o de la cancelación de la personalidad jurídica de toda la Universidad.

Aquí me quiero detener, porque el informe que elabora la Divesup, del Ministerio de Educación, y que lo envía al Consejo Nacional de Educación pidiendo la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad, hace referencia a que la causal de revocación del reconocimiento oficial - que es totalmente contraria a lo que señala la ministra- es el incumplimiento estatutario de la Universidad.

Entonces, la ministra de Educación, en esa sesión del 9 de marzo, señala que existía tal incumplimiento estatutario existía, pero que no era lo suficientemente grave como para que se produjera la revocación. Eso nos parece algo completamente contradictorio.

A juicio nuestro, y por los análisis jurídicos que hemos realizado con nuestros abogados, con estas contradicciones lo que hace el Ministerio de Educación, a través de la Divesup, es proteger la figura del administrador provisional, que tuvo una administración no solo deficiente, pensando que en la ley N° 20.800, que es una norma que no soluciona el problema que pretendía solucionar -esto nos ha quedado claro a todos-, sino que con su actuación y gestión provocó incluso la quiebra de la Universidad. Y aquí lo contradictorio, porque la causal que se invocó para el cierre y la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad es la misma que la ministra señala que no era la causal adecuada para la revocación. Lo señala unos meses antes de que se enviara ese informe en esta misma Comisión, con fecha 16 de marzo, que fue enviado al Consejo Nacional de Educación, y el cual fue aprobado con esa causal, y no con la causal de liquidación, que fue la causal principal para la revocación del reconocimiento oficial. Es más, la ley N° 20.800 establece que la liquidación es una causal de la revocación, y aquí todos sabemos por qué fue que se produjo

esta liquidación. Y lo voy a recordar. Esta liquidación se produjo porque hubo un administrador que tenía un mandato de la ley, para representar no solo los intereses de la Universidad, sino también los de la comunidad universitaria en su conjunto, en todas las instancias. Pero este administrador acudió sin un abogado, lo cual es sumamente grave; cualquier persona, por mínima educación que tenga, sabe que debe concurrir con un abogado a un juicio.

En la misma línea, la diputada Yasna Provoste le pregunta al administrador provisional por los costos asociados a su gestión, quien le señala que tiene un equipo jurídico muy eficiente y que ese equipo jurídico, así como también la Fiscalía, no habían generado grandes costos.

Aquí estamos viendo que el abogado Felipe Navarrete Peña tuvo un pago -los créditos están verificados en el Cuarto Juzgado Civil, en la causa que corresponde-, de 10 millones de pesos, y por esos 10 millones de pesos interpuso un recurso de nulidad, el que fue declarado extemporáneo por la Corte, y luego presentó una apelación, que está en curso. De todo esto, no hemos visto ningún resultado.

Entonces, no sabemos cuál ha sido la eficiencia del equipo jurídico, cuando además la fiscal Jessica Tapia tiene un crédito verificado por 55 millones de pesos, que sí sabemos que ella cumplía cuatro cargos en la universidad, que estaban en una misma personas: directora de una escuela, directora de una clínica jurídica, fiscal de la universidad y, además, secretaria general. Como fue funcionaria por muchos años, lo lógico era que su pago fuera mucho más adeudado, más abultada la verificación de su crédito, pero no contábamos con un equipo de la fiscalía ni con un equipo de abogados eficientes que merecieran un pago de esa misma envergadura.

Siguiendo con las intervenciones que se hicieron en esta comisión, otro tema de gravedad dice relación con las deudas de la universidad. El 9 de marzo, la propia ministra

de Educación señala -página 15 del acta- que las deudas suman 9.466.955.661 pesos. En consecuencia, queda un déficit de 1.203.234.020 pesos, que no cubriría ni siquiera si se vende la última pizarra de Arcis. Imagino que recuerdan esa frase que fue bastante polémica.

Sin embargo, en su último informe, el administrador señala que eran 8.800 millones de pesos. Por lo tanto, claramente, hay una diferencia, pero la diferencia más preocupante es la que surge cuando el liquidador señala - en esta misma comisión- que los créditos verificados son de 6.429 millones de pesos, por lo que hay una diferencia de alrededor de 3.000 millones de pesos. Nos preguntamos qué ocurre con esos 3.000 millones, y el liquidador señaló que no tenía los balances de 2016, período del administrador provisional, por tanto, no podía saber qué ocurría con esos 3.000 millones de pesos o cuál era la razón de esa diferencia.

Otra fecha importante es cuando la ministra de Educación señala que mañana, refiriéndose al 10 de marzo -porque ella vino a la comisión el 9 de marzo-, se vería el tema de las matrículas. ¿Qué pasa con el tema de los colombianos y las matrículas de postgrados? Tenemos una documentación que vamos a entregar a la comisión, donde la propia institución colombiana reclama que no se hacían efectivas sus matrículas, por la gestión del administrador provisional. A su vez, el administrador provisional señalaba que ellos no pagaban. Con eso surgen dudas importantes en relación con la gestión del administrador y con esas matrículas por conocer si se cumplían o no.

Ahora bien, todos recordamos los dichos de la ministra cuando el 5 de diciembre señaló que Arcis se iba a cerrar. Incluso, la diputada Hoffmann dijo que en muchas cosas no concordaba con la ministra porque eran de ideologías distintas, y que sus dichos ahuyentarían a los estudiantes a matricularse, en vez de hacer un llamado a acercarse.

Está en actas.

En relación con la voluntad política, sabiendo que Arcis no es cualquier universidad sino más bien representa un proyecto de defensa de los derechos humanos y constituye un proyecto académico único en la sociedad chilena, el diputado Poblete señaló que existía la remota posibilidad de que el Estado pagara los 120 mil millones de pesos que faltaban para que la deuda quedara en cero y se buscara a una persona para hacerse cargo de la universidad, y que los dineros que ingresaran no fueran a los bolsillos de cualquiera. Sin embargo, la respuesta de la ministra fue que para ellos es una universidad privada como cualquier otro establecimiento universitario privado del país. De estas palabras se desprende que no existía esa voluntad política; no solo no se hizo un plan de salvataje o de reestructuración, como mandata la ley, sino que tampoco el administrador defendió judicialmente los intereses de la universidad, terminando en una liquidación. No existía voluntad política para hacer los cambios legislativos que, nosotros como federación, junto con la bancada estudiantil y la Confech, presentamos a través de una modificación a la ley N° 20.800 para que nuestro proyecto académico pudiese continuar.

Esta propuesta fue rechazada por el Ministerio de Educación. Incluso, la ministra señala lo siguiente -página 46-, refiriéndose a la educación privada, el lucro y todo lo relacionado: "Ese tema no lo estamos inventando nosotros ahora, viene del período de Pinochet".

Sin embargo, repito, no hubo voluntad política para cambiar, precisamente, lo que viene de ese período.

Volviendo al tema de las deudas de la universidad, otro tema que nos preocupa, no sabemos los oficios que han sido respondidos a la comisión. Queremos conocer la razón de esa enorme diferencia, de los 3.000 millones de pesos que existen entre los créditos verificados y las cuentas que

saca el administrador provisional y la División de Educación Superior (Divesup) respecto de la deuda de la universidad. También nos interesa establecer responsabilidades, pues la ley N° 20.800 no establece responsabilidades para el administrador provisional. Como ustedes saben, el administrador no es funcionario, sino una persona que está a honorarios, por lo que no hay responsabilidades administrativas.

Por ello, consideramos que deben hacerse cambios en la ley; es lamentable que la reforma de la Educación Superior no contemple cambios sustanciales en la ley N° 20.800, pues sabemos que con esta reforma muchas universidades podrían cerrarse y el administrador provisional no tendría ninguna responsabilidad al respecto. ¿Quién responde por la mala gestión? Al final, los propios estudiantes recibimos y somos responsables de una mala gestión, porque el Estado de Chile no se hace cargo de esta materia.

En relación con los créditos verificados, la diputada Vallejo le hace la misma pregunta a la ministra, pues el administrador provisional señala que no existen los balances de 2016. Por lo tanto, insistimos en que esos balances sean informados y vistos por esta comisión.

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Disculpe que la interrumpa, ¿habría acuerdo para reiterar los oficios?

Acordado.

Puede continuar.

La señorita **BELTRAMI** (doña Sandra).- Señor Presidente, queremos dejar claro que hubo una intencionalidad al respecto, incluso una maniobra política para cerrar nuestra universidad. Desconocemos cuáles son las razones, pero que llegue una persona -no lo personalizo en Patricio Velasco- que incumpla su propio plan, no realice un plan de salvataje y acuda a un juicio sin abogados, claramente, es buscar que se produzca el fin de nuestra universidad y que este proyecto educativo no pueda continuar. Para nosotros

es evidente y lo hemos documentado como tal.

Incluso, el 28 de marzo solicitamos la remoción del administrador provisional. Estamos en el mes de julio y perfectamente podría haberse removido e instalado un administrador interino, si fuese necesario. Sin embargo, el Ministerio de Educación rechazó nuestra solicitud señalando que no tenemos las facultades para solicitarla al Consejo Nacional de Educación -lo que cual es cierto-, pero obviamente nuestra intención era que el propio ministerio la solicitara al Consejo Nacional de Educación. Claramente, esa actitud significa que no hay un reconocimiento de esta mala gestión y de la irresponsabilidad con la que se actuó. De una u otra manera también compromete al Ministerio de Educación, porque según la ley N° 20.800, dicho ministerio se manda solo. De una u otra forma alguien debería fiscalizarlo, porque efectivamente no tiene un fiscalizador. El Estado de Chile debe responder por toda esta situación.

El 28 de febrero se produjo la liquidación y nos encontramos con una colisión de dos leyes, respecto de las cuales puede haber distintas opiniones jurídicas, incluso distintas escuelas que postulen opiniones diversas, porque estamos ante dos leyes especiales.

Entonces, el Ministerio de Educación dice que la ley N° 20.800 es una ley especial, que debe prevalecer por sobre la ley N° 20.720.

A su vez, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento dice que no; que la ley N° 20.720 es una ley especial que debe prevalecer por sobre la ley N° 20.800.

Sin embargo, tenemos un tribunal, el Cuarto Juzgado Civil, y nos guste o no sabemos que son fallos totalmente vinculantes. La única forma de cuestionar o de atacar los fallos judiciales es a través de los propios procedimientos judiciales que establece la ley.

Un fallo judicial, de 7 de abril, señala que la ley N°

20.720 está por sobre la ley N° 20.800, con relación a que el propio administrador provisional solicita tener facultades que son propias del liquidador, facultades para administrar los bienes, a los cuales llama bienes esenciales, lo que incluye a los trabajadores, a las propiedades muebles e inmuebles relacionadas con la universidad, pero eso es rechazado por el tribunal.

¿A qué voy con esto? Lo quiero enlazar con lo que ocurrió después, que también fue materia de esta comisión, la designación de dos directores en paralelo en la Escuela de Derecho. Hubo un director de escuela que tenía un contrato de trabajo designado por el liquidador; luego, un director de escuela designado por un decreto, por el administrador provisional, pero que no tenía capacidad de contratación.

Entonces, vemos que se está frente a un problema donde no se estaban resguardando los derechos de los estudiantes, pues se instaló a dos directores en una misma carrera, que se encontraban en una pugna política. De alguna manera el liquidador Cristián Herrera lo dijo acá, y está en acta la razón por la cual había elegido al profesor Juan Andrés Arenas, docente que llevaba quince años trabajando en la universidad: su currículum. Y el motivo por la cual no había elegido al candidato, por llamarlo de alguna manera, o la persona que designó el administrador provisional, también era por su currículum: lo había obtenido en Ecuador. Eso era rechazado por la Corte Suprema, razón por la cual no lo había designado.

Realmente, lamentamos mucho la salida a esta situación, porque terminó siendo una salida política y no académica, en la cual se despide al director Arenas, que había sido elegido por su currículum y se puso a una tercera persona, de la cual no voy a hacer cuestionamiento a su currículum porque es una profesora antigua de la universidad.

Debo decir que nos pareció lamentable que se buscara una salida política a un tema académico; en el fondo, la

administración provisional no resguardó los intereses de los estudiantes. Hubo una salida entre la liquidación y el ministerio de carácter político para terminar con un conflicto. Esa fue una forma de vulnerar, una vez más, nuestros derechos.

Hay otros temas que tienen relación con pasar a llevar, en parte, la autonomía universitaria. Sabemos que una universidad que está intervenida por el Estado no puede tener mucha autonomía, pero sí debe haber ciertos límites que, incluso, son para todo tipo de instituciones.

Por ejemplo, la exoneración de profesores comenzó en junio de 2016 y afectó a profesores históricos de la universidad. Esos hechos se fueron repitiendo y no es correcto cuando ocurre por situaciones extraacadémicas. Afectó a personas que presentaron una clara oposición a la administración provisional. Incluso, a personas que en un momento quisieron reconstituir la corporación, agregando docentes a la corporación de la universidad, la cual tiene sus funciones suspendidas. Sin embargo, esos docentes fueron desvinculados por querer ser parte de la corporación. A principios de este año, a través de la vicerrectoría académica, también ocurrió una exoneración de docentes.

Debo señalar que mi marido fue docente de ARCIS durante trece años y se enteró que ya no lo era porque su correo ARCIS fue caducado. Eso está relacionado con temas extraacadémicos. Creo que todos lo pueden imaginar.

Creemos que esa no es la conducta que debe tener la administración provisional, y mucho menos ser avalada por el Ministerio de Educación, porque en el momento que se realizan las denuncias ante el Ministerio y este no ejerce ningún tipo de facultad para que esta situación termine, por supuesto que lo único que podemos pensar es que está de acuerdo o que es parte de esas políticas, porque las denuncias se han realizado una y otra vez.

Tenemos un vicerrector académico que la semana pasada realizó una reunión de directores de escuelas, y no tenía Tabla, y los invita para presentarles una federación paralela a la nuestra, que no es reconocida por la Confech ni por los tribunales electorales, con un supuesto proceso electoral bastante dudoso, y presiona a esos docentes a reconocer esa federación.

La señora **HOFFMANN** (doña María José).- ¿Tú ya no eres presidenta de la federación?

La señora **BELTRAMI** (doña Sandra).- Sí, soy presidenta de la federación, pero esto es como si los opositores de la Presidenta Bachelet crearan un gobierno paralelo. Por supuesto, todos los que estamos aquí creemos en la democracia y, evidentemente, esa situación no correspondería. Y en nuestro caso, mucho menos que sea avalada por autoridades de la universidad como el vicerrector académico.

Claramente, las autoridades de la universidad no deben intervenir en los asuntos estudiantiles. Siempre ha existido claridad al respecto y nosotros lo denunciábamos justamente en esta comisión porque sentimos que hay persecución política. Ha habido persecución política en contra de nuestros docentes y de nuestra federación. Incluso, la violencia y las agresiones ocurren al interior de la universidad y nadie toma cartas en el asunto, ni la propia administración provisional.

La señora **HOFFMANN** (doña María José).- Sandra, no te quiero interrumpir tanto, pero ya has mencionado dos veces el tema de una operación o persecución política, y me gustaría saber si puedes profundizar el punto, porque estoy bastante perdida con lo que estás diciendo.

Recuerdo haber leído del cambio de las federaciones y, efectivamente, es un conflicto interno, y por supuesto que te creo.

¿Puedes explicar un poco más a qué te refieres con

persecución política? ¿De qué sector es? ¿Cuál es el conflicto político?

La señora **BELTRAMI** (doña Sandra).- No hablo de ningún sector o partido político específico, pero sí a sectores que en este momento se podrían dividir: el sector que está a favor del administrador provisional y de las políticas de la administración provisional y los sectores disidentes de las políticas de la administración provisional. A eso me refiero con persecución política.

Los docentes exonerados fueron aquellos que todo el tiempo, y públicamente, estuvieron en contra de las políticas de la administración provisional, y siguen siendo exonerados. Los estudiantes están teniendo problemas con sus matrículas y dificultades para que se solucionen sus situaciones de deudas. Todos ellos son cercanos a nuestra federación.

Un universo de aproximadamente 25 personas, que en absoluto son representativas de la universidad, entre ellas, las que avanzan en una línea paralela a esta federación, apoyados por la vicerrectoría académica y la administración provisional, ha ejercido actos de violencia en contra de mi persona y de quienes sí apoyan a esta federación. No recuerdo la fecha, pero en el portal de internet EMOL se publicó una foto que decía: "Sandra Beltrami, tus días están contados"; ante lo cual, con nuestros abogados tratamos de inferir a lo que apuntaba esa frase, pues se podía interpretar de distintas formas.

Es un hecho que nos parece grave, porque en una universidad normal no ocurren ese tipo de hechos, pese a que la situación que enfrenta Arcis no es normal. En otras universidades los estudiantes no se atreven a realizar ese tipo de acciones, y los que sí se atreven es porque en esas casas de estudio no existe disciplina.

Siempre hemos estado en contra de que existan sanciones hacia los estudiantes por movilizarse, porque participamos

en las movilizaciones y creemos en el derecho a la movilización. No obstante, pensamos que las amenazas y las agresiones físicas o verbales no forman parte de una movilización política, sino de situaciones con otro carácter.

Desde el momento en que el administrador provisional no hace nada al respecto, ocurren situaciones como el saqueo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de nuestra universidad, el cual se produjo sin que nadie dijera o hiciera algo. Claramente, desde el momento en que permiten que esas situaciones ocurran y se enmarquen en la impunidad, no se está resguardando los derechos de los estudiantes.

Además de lo que acabo de mencionar, existen otras situaciones graves. Hace un par de semanas estuvo en esta comisión la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Alejandra Contreras, y el diputado Poblete le hizo una pregunta respecto de los estudiantes de la sede Concepción que desde hace dos años no tienen matrícula. Ahora va a ingresar el administrador de cierre, pues el Consejo Nacional de Educación no llegó a acuerdo con el representante del Ministerio de Educación, pero lo peor es que no sabemos quién es esa persona ni por qué no se llegó a acuerdo. Sí sabemos que la administración de cierre se va a dilatar más.

Al respecto, nuestra pregunta es qué va a pasar con todos los estudiantes que no se han matriculado. En este momento hablamos de una cifra de matrícula cercana a los 500 estudiantes, y aún existe una cantidad que no podemos medir que tiene deudas, los que no han podido continuar con sus carreras, que tienen problemas académicos con sus tesis, que han congelado sus carreras o que tienen problemas para convalidar sus carreras. La universidad se debe hacer cargo de esta situación y, por su parte, el Estado se debe hacer cargo de que esos estudiantes puedan continuar con sus

carreras.

Nos preocupa muchísimo la situación de los deudores. No queremos que se les regale la carrera -desgraciadamente en Chile no existe la educación gratuita-, pero sí queremos que tengan derecho a la matrícula, obtengan los beneficios que pueda otorgar el Ministerio de Educación con la Ley N° 2.800 o que simplemente puedan terminar sus carreras.

Se ha establecido una beca de reubicación para quienes pretendan convalidar sus carreras y para quienes quieran terminar sus carreras en otros planteles. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes terminaremos nuestras carreras en la Universidad Arcis porque cursamos cuarto o quinto año de carrera, para los que trasladarse a otra universidad es un tema muy complejo. El problema es que estas becas no son para estudiantes que sí se quedarán en la universidad, quienes también fuimos una especie de "conejiillos de indias" de la Ley N° 20.800, la que todos sabemos no tuvo ni una utilidad, porque nos encontramos en las mismas condiciones que los estudiantes de la Universidad del Mar: con un liquidador. Claramente, lo que pretendía solucionar la Ley N° 20.800, no lo solucionó.

Para nosotros el problema de las becas es importante, razón por la que presentaremos una moción durante la tramitación el proyecto de ley de Presupuestos, a fin de que se establezcan becas para todos los estudiantes de la Universidad Arcis, moción que no implicará un costo tan alto para el Estado, pues los estudiantes de Arcis son pocos, no como la Universidad del Mar que tenía alrededor de 30.000 estudiantes.

Se trata de una situación paradójica, pues se supone que las becas son para personas que las necesitan, pero aquí se están ofreciendo a personas que se pretendan reubicar en otras universidades, independiente de si las necesitan o no; sin embargo, en Arcis existen muchos estudiantes que no se pueden matricular porque tienen deudas, y ellos sí

necesitan una beca. El criterio con el que se ha planteado el beneficio rompe el espíritu de las becas.

La señora **HOFFMANN** (doña María José).- Señor Presidente, por su intermedio, quiero que la señorita Beltrami explique a qué se refiere con "romper el espíritu".

La señorita **BELTRAMI** (doña Sandra).- Señor Presidente, muchos de los estudiantes que se quedan en la universidad no tienen cómo pagar, y al ser deudores, no se les permite matricularse. Debiese suceder que aquellas personas que realmente necesitan, pudiesen optar a una beca, muy por el contrario de lo que ocurre con la beca de reubicación, que se otorga sin importar si la persona la necesita o no. Con esto me refiero a que se rompe con las lógicas de las becas, porque se supone que debieran beneficiar a personas que sí las necesitan.

Para finalizar, consideramos que toda esta situación que enfrenta la universidad es muy grave. Arcis, pese a ser pequeña, logró ser emblemática y marcar la agenda en un periodo de este año, por lo que creemos que esto no puede volver a pasar.

Apelamos a que esta comisión investigadora sea de utilidad, pues últimamente hemos visto que las comisiones terminan siendo frentes entre colisiones políticas y que los informes finales tienen por objeto "pasar cuentas políticas", no resolver los problemas. Esperamos que realmente exista un informe objetivo y que no se base en pasar cuentas políticas, sino en buscar soluciones al problema que dio origen a esta comisión.

La administración provisional es fundamental, porque nos parece que existe impunidad en esta materia.

Creemos que nuestros derechos han sido vulnerados profundamente, pues el día de mañana probablemente seremos personas con un título que perderá su valor y nadie nos indemnizará por ello. De hecho, ni si siquiera sabemos si puede ser indemnizado, porque un título es un documento

invaluable. El matrimonio que se supone que es para toda la vida, pero no lo es; en cambio, el título sí es para toda la vida.

A raíz de esta situación, tal vez muchas personas deberán seguir estudiando para realmente optar a un trabajo digno. Por ello, solicitamos que esta comisión cumpla con su función y se modifique la legislación. Sabemos que después de la reforma a la educación superior, con los criterios de la acreditación por tres años, muchas universidades no tienen ese tipo de acreditación y serán muchos los planteles que cerrarán y serán muchos los estudiantes que vivirán lo mismo que nosotros y, por supuesto, no queremos que eso ocurra.

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Sandra, muchas gracias por su exposición. Enviaremos los oficios para solicitar la información que necesitas, la cual te haremos llegar en su momento.

Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete.

El señor **POBLETE**.- Señor Presidente, quiero saludar a toda la gente de Arcis en la persona de Sandra, quien ha tenido la valentía y la entereza de estar hasta el final de un proceso, cuyo final no ha sido el que nos hubiese gustado. Quiero felicitar a todos estos estudiantes; son ellos quienes están construyendo el país y el tipo de universidad que queremos. Desgraciadamente, en este caso, Arcis, a pesar de todo lo que queremos que continúe como proyecto, parece que no la vamos a tener.

Mal por Chile, es una pérdida para todos.

El señor **PAULSEN** (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 11.51 horas.

ALEJANDRO ZAMORA RODRÍGUEZ,
Redactor
Coordinador Taquígrafos Comisiones.

CEI 40 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL UNIVERSIDAD ARCIS
Período Legislativo 2014-2018

ASISTENTES A LA SESIÓN 11^a, DE FECHA 13 julio 2017

	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
1	Melissa Gutiérrez	Periodista	Dip. Emilio Vallejo	esquipoconile@gmail.com
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				